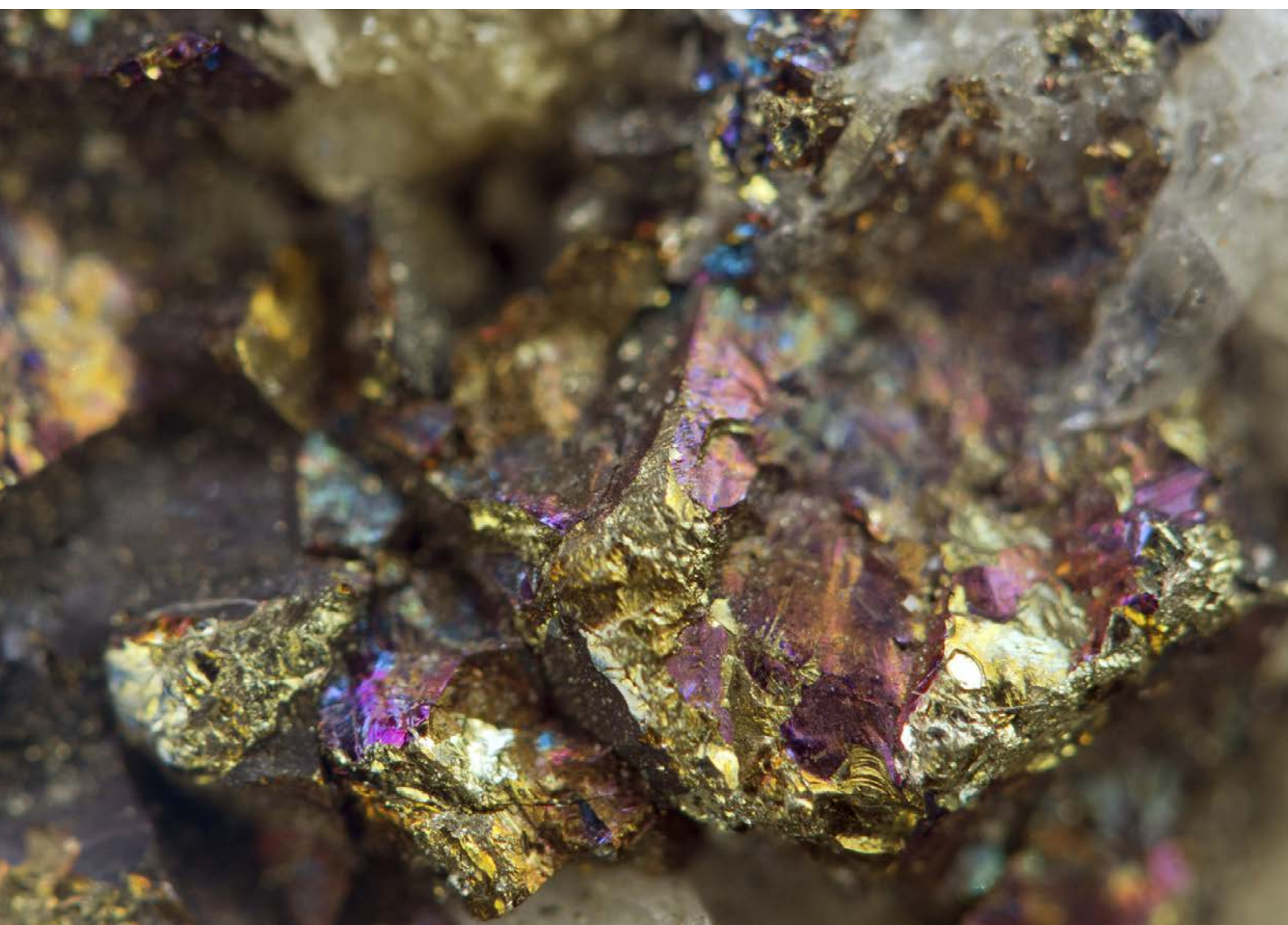


**DEBIDA DILIGENCIA EN LA CADENA DE
SUMINISTROS DE ORO COLOMBIANA
MINERÍA AURÍFERA EN ANTIOQUIA**



Acerca de la OCDE

La OCDE es un foro donde los gobiernos pueden comparar y compartir experiencias en materia de políticas, identificar buenas prácticas ante retos emergentes y promover decisiones y recomendaciones que lleven a mejores políticas para una vida mejor. La misión de la OCDE es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social en el mundo.

Acerca de la Guía de Debita Diligencia de la OCDE

La Guía de Debita Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo (Guía de Debita Diligencia de la OCDE) ofrece una serie de recomendaciones detalladas para ayudar a las empresas a respetar los derechos humanos y evitar que apoyen el conflicto por medio de sus prácticas y decisiones de compra. La Guía de Debita Diligencia de la OCDE está dirigida a cualquier compañía que potencialmente pueda estarse abasteciendo de minerales o metales provenientes de áreas de conflicto y de alto riesgo.

Acera de este estudio

Este informe es el segundo en una serie de evaluaciones de las cadenas de suministro de oro en Colombia y de la Guía de Debita Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo en el contexto colombiano. Analiza las condiciones de la industria extractiva y los riesgos relacionados para la región colombiana de Antioquia.

Este informe fue elaborado por Frédéric Massé y Juan Munévar como consultores para la Secretaría de la OCDE.

Conozca más sobre el trabajo de la OCDE en el sector minero en:

mneguidelines.oecd.org/mining.htm



Cofunded by the European Union

© OCDE 2016. Este documento ha sido publicado bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones y argumentos expresados en él no reflejan necesariamente las opiniones oficiales de la Organización o de sus miembros. Tanto este documento, como cualquier mapa y data que se incluya en él, no conllevan perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.

Índice

Introducción.....	4
El sector minero aurífero en Antioquia	4
Actores en la minería de oro	6
Vínculos entre minería aurífera, conflicto armado y dinámicas criminales	9
Prevalencia de Riesgos del Anexo II de la Guía en Antioquia	11
Serios abusos asociados con la extracción, transporte y comercialización de oro.....	11
Crímenes de guerra u otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, crímenes contra la humanidad o genocidio.....	13
Apoyo directo o indirecto a grupos armados no estatales	15
Fuerzas de seguridad públicas o privadas	16
Sobornos y tergiversación del origen del oro	17
Sobornos.....	19
Lavado de dinero	21
Procesos de formalización y debida diligencia: iniciativas y perspectivas relevantes	21
Conclusión.....	23
Bibliografía.....	24

Introducción

Antioquia es el segundo departamento más rico de Colombia, y posiblemente la región en la cual es más pertinente y complejo implementar medidas de debida diligencia para la cadena de suministros de oro. El departamento de Antioquia representa aproximadamente la mitad de la producción de oro en Colombia. En Medellín, la capital del departamento, se encuentran las fundiciones y comercializadoras internacionales más importantes. Adicionalmente, Antioquia ha tenido una larga historia de actores armados y organizaciones criminales, incluyendo carteles de narcotráfico, paramilitares, grupos guerrilleros y bandas criminales vinculadas con la minería y comercialización de oro.

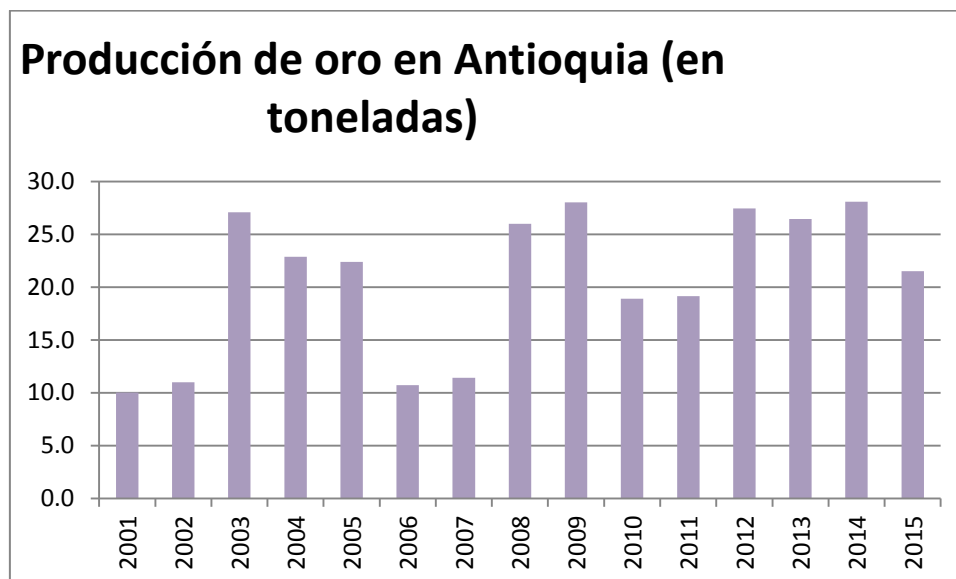
Antioquia también cuenta con un sólido marco institucional comprometido con mejorar la gobernanza en las áreas donde hay minería de oro. El único departamento al cual la Agencia Nacional de Minería le puede delegar autoridad es al departamento de Antioquia (por medio de su Secretaría de Minería), lo que le permite a la Gobernación tomar decisiones sobre solicitudes de títulos mineros.¹ Aunque persiste la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales en ciertas zonas rurales, las fuerzas de seguridad han establecido cierto nivel de control territorial y han reducido la capacidad que tienen estos grupos armados ilegales de afectar zonas altamente pobladas. No obstante, aún es difícil diferenciar entre pequeños mineros legítimos que no han podido legalizarse o formalizarse,² y aquellos controlados por grupos armados ilegales u organizaciones criminales. En consecuencia, y a pesar de que tiene los mayores esfuerzos de formalización, es probablemente en Antioquia en donde resulta más difícil diferenciar entre mineros tradicionales/informales y mineros ilegales/criminales, que en cualquier otro departamento.

El sector minero aurífero en Antioquia

En Antioquia existe una larga tradición de minería aurífera. Las comunidades indígenas ya practicaban minería artesanal en la región en tiempos precolombinos, pero el verdadero crecimiento ocurrió con la llegada de los españoles y el trabajo esclavo de los negros (Giraldo y Muñoz, 2012). Durante la época de la Colonia, e incluso luego de que Colombia se independizara en 1819, el oro era la principal fuente de ingresos de Antioquia, principalmente debido a la minería artesanal y de pequeña escala. En el siglo XIX una serie de inversionistas ingleses y franceses establecieron las minas de oro de Frontino en Segovia, una de las mayores operaciones auríferas de la época. Gradualmente, el café fue reemplazando al oro como la principal fuente de ingresos, pero Antioquia continuó siendo el mayor productor de oro de Colombia durante gran parte del siglo XX.

En la última década ha resurgido la producción de oro en Antioquia. Luego de altos niveles de producción durante la década de los ochenta, donde se alcanzó un pico de 31,7 toneladas en 1984, la producción cayó durante los noventa con un mínimo de 4,9 toneladas en el año 1994. Entre finales de los noventa y finales de la década del 2000 la producción resurgió y alcanzó un máximo en diez años de 28 toneladas para 2009. Luego de una leve caída luego del 2009 la producción ha continuado con su crecimiento alcanzando 28 toneladas en 2014. En 2015 el nivel de producción fue de 21,5 toneladas. Según algunas estimaciones, entre el 65% y 70% del oro producido en Antioquia proviene de operaciones aluviales y entre el 30% a 35% de vetas subterráneas (Ministerio del Medio Ambiente, 2012), y la producción de oro en Antioquia representa entre el 2% y el 4% del PIB del departamento.

Figura 1: Producción de oro en Antioquia



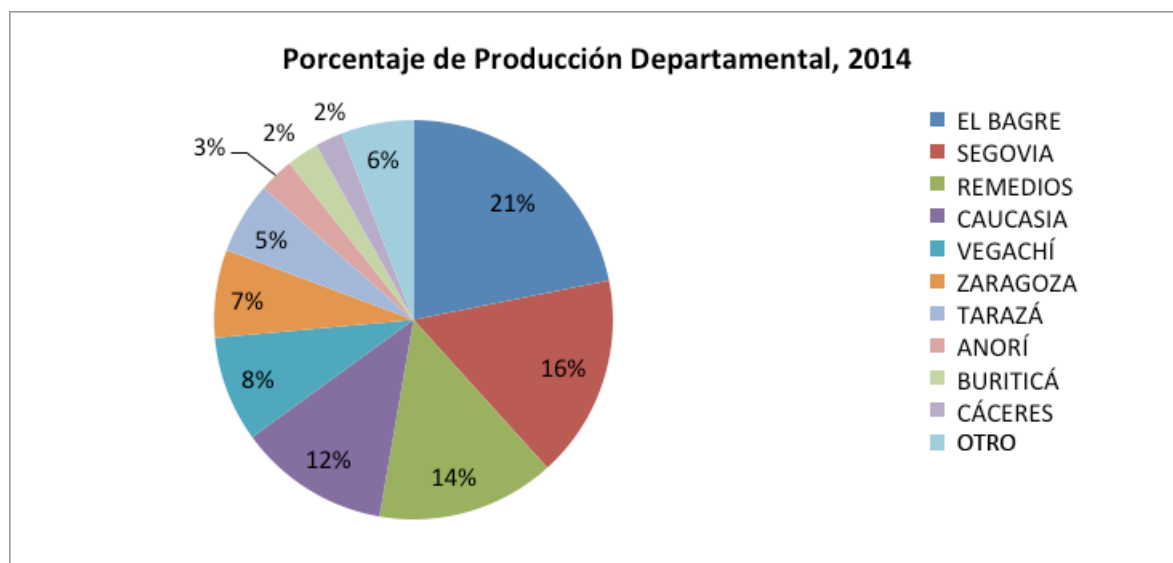
Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano, 2016

Durante la última década, Antioquia ha atraído la atención de empresas exploradoras internacionales *junior*. Algunos de los nuevos proyectos más prometedores incluyen:

- Una mina que produce 1,5 toneladas de oro anualmente en Santa Rosa de Osos operada por la empresa Red Eagle Mining. La empresa recibió su licencia ambiental recientemente y se espera que comience a producir en el 2016;
- Un desarrollo realizado por Continental Gold con una inversión de más de USD 171 millones en Buriticá, con el cual se espera producir un producir en promedio 7,3 toneladas anuales a partir del 2017;
- Un proyecto que produce 11,3 toneladas anuales en San Roque, propiedad de Anglo Gold Ashanti y B2Gold. Aún está en desarrollo y podría comenzar a producir en el año 2020.

Se han solicitado títulos para exploración sobre más del 62% del territorio antioqueño, mientras que las concesiones mineras ya cubren el 18% del territorio del departamento. La minería aurífera se concentra en un puñado de municipios. Aunque 46 de los 125 municipios que hay en Antioquia reportaron haber producido oro en 2014, cerca del 95% de la producción total de oro provino de los diez principales municipios productores (SIMCO, 2016). Tradicionalmente, la producción aurífera se ha concentrado en 3 de las 9 subregiones del departamento: Bajo Cauca (municipios: El Bagre, Nechí, Zaragoza y Cáceres), Nordeste (Municipios: Segovia y Remedios) y Suroeste (Buriticá y Andes). Cada región genera aproximadamente un tercio de la producción aurífera del departamento.

Figura 2: Porcentaje de Producción Departamental, 2014



Fuente: SIMCO, 2016

En consecuencia, los municipios con mayor producción dependen económica y socialmente del oro en gran medida. El Bagre, por ejemplo, es el mayor productor de oro en Antioquia, y el 80%-90% de sus ingresos provienen del oro (entrevistas con mineros locales y ONGs locales). De manera similar, en Segovia (Nordeste Antioqueño) los 10.000-15.000 mineros, 3.000 chatarreros (recolectores de relaves y desechos con contenido de oro) y 1.500 arrieros (transportadores de mineral aurífero desde las minas de pequeña escala a plantas de beneficio artesanales/fundiciones mineras) dependen económica y socialmente del oro. Buriticá (Suroeste Antioqueño) solía ser una región tradicionalmente cafetera y ganadera con pequeñas operaciones de producción aurífera, sin embargo, en el municipio se ha intensificado la minería de veta luego de que Continental Gold comenzó sus operaciones en 2007. Mineros de otras regiones han migrado al municipio atraídos por el descubrimiento de vetas de oro prometedoras (la población aumentó de 5.000 a 30.000 mineros entre 2008 y 2013) y los ganaderos tradicionales están comenzando a hacer de la minería de oro su principal fuente de ingresos.³

Actores en la minería de oro

A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades nacionales y departamentales por recolectar información más confiable sobre el sector minero aurífero en Antioquia, el carácter altamente dinámico del sector y los elevados niveles de minería no autorizada de pequeña escala y de subsistencia dan lugar a información poco fiable. El censo minero realizado por el gobierno nacional entre el 2010 y el 2011 reveló que de las 2.025 unidades mineras identificadas en Antioquia, cerca a tres cuartos se dedicaba a la minería de oro, un 79,1% no contaba con más de 7 empleados (un proxy para escala de operaciones utilizado en el censo) y un 83% operaba sin título minero (Ministerio de Minas, 2011).

Mineros Artesanales y de Pequeña Escala (MAPE)⁴

A pesar de que en Antioquia se encuentran algunas de las más destacadas empresas productoras y exploradoras de oro del país, la mayoría de la producción de oro aún está en manos de mineros artesanales y de pequeña escala. El censo nacional minero realizado entre el 2010 y el 2011 reveló que en Antioquia había 1.224 unidades mineras produciendo oro sin título minero (de un total de 1.526), y de éstas últimas, un 68% estaba dedicado a la minería aluvial y el resto a la minería de veta subterránea (Goñi et al., 2014). Un estudio más reciente llevado a cabo por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia reveló que hay más de 1.664 sitios mineros sin título en el departamento, de los cuales casi 500 se encuentran en la subregión del Bajo Cauca (VerdadAbierta, 2015).

La minería artesanal y de pequeña escala es una importante fuente de trabajo en Antioquia. El censo minero realizado entre el 2010 y el 2011 estimó que hay más de 11.000 trabajadores empleados en operaciones que no cuentan con título minero (Goñi et al., 2014), pero de acuerdo con fuentes locales y entrevistas realizadas para este estudio, la cifra podría estar más cerca de 60.000.

Además de las unidades mineras en sí, hay una serie de pequeños proveedores de servicios cuya subsistencia depende de la minería artesanal y de pequeña escala. Los entables son pequeñas plantas de beneficio usualmente ubicadas cerca de sitios mineros de pequeña escala. En el 2013, un estudio sobre el uso del mercurio llevado a cabo por el PNUD, la Universidad de British Columbia, USAID y las autoridades ambientales locales registró más de 320 de estas pequeñas plantas de beneficio, o entables, en cinco de los diez mayores municipios productores de Antioquia (Remedios, Segovia, El Bagre y Nechí) (Cordy, 2013). Adicionalmente, se estima que aproximadamente 10.000 chatarreros, 25.000 barequeros y 3.000 transportadores obtienen ingresos a partir de la minería de pequeña escala.⁵ A pesar de los considerables esfuerzos por formalizar el sector en los últimos años (ver la última sección), se estima que sólo una pequeña parte de los mineros artesanales y de pequeña escala operan al amparo de un título minero.

Una de las características del sector minero aurífero antioqueño ha sido el auge de grupos de mineros artesanales y de pequeña escala que gradualmente han acumulado suficiente capital para adquirir sus propios títulos mineros, plantas de beneficio artesanal e incluso establecer comercializadoras locales. Dado el rápido crecimiento de sus ingresos, algunos grupos han formado alianzas de seguridad con grupos armados ilegales o establecido sus propios grupos de seguridad. Un buen ejemplo de este tipo de grupos es el de los 'Segovianos'. Los mineros locales y las autoridades sostienen que este grupo, originalmente compuesto por pequeños mineros de Segovia, tiene control directo o indirecto sobre varias minas, comercializadoras y plantas de beneficio locales, y sobre el mercado negro de explosivos caseros (entrevistas con mineros de pequeña escala de Segovia, 2015; entrevista con antiguo funcionario de la Secretaría de Minas, 2015). Aunque algunos de los miembros del grupo han sido capturados, grupos como este tienen mucho poder a nivel local. Varias entrevistas con partes interesadas locales sugieren que los miembros de estos grupos organizados también son dueños de compañías mineras en el exterior y han hecho alianzas con socios internacionales, por ejemplo en Canadá y Rusia.

Empresas mineras de gran escala

En Antioquia se encuentran ubicadas varias operaciones mineras de oro de mediana y gran escala. La más grande y una de las más antiguas es Mineros S.A., una empresa de minería aluvial colombiana cuya mayor operación se encuentra ubicada en el municipio de El Bagre. La empresa tiene títulos

mineros sobre más de 40.000 hectáreas en el departamento y produce el 14% del oro de Antioquia, casi el 40% de todo el oro legal producido en Colombia y 6% de la producción nacional total (El Tiempo, 2014). A pesar de que la empresa es relativamente pequeña comparada con otras empresas mineras internacionales, es un importante actor económico en la subregión del Bajo Cauca, donde produce hasta 55% de todo el oro extraído legalmente (Contraloría General de la Nación, 2013, p. 50).

Gran Colombia Gold, una empresa de mediana escala constituida en Canadá que cotiza en la Bolsa de Toronto, es el siguiente mayor productor. Las operaciones principales de Gran Colombia están ubicadas en Segovia y Remedios. Allí compraron las minas de la Frontino Gold Mines, una operación minera con más de 150 años de antigüedad que se declaró en bancarrota en el 2004. Actualmente produce poco menos de tres toneladas de oro anualmente, de las cuales una gran parte proviene de subcontratistas de pequeña y mediana escala que operan dentro de su concesión y envían mineral aurífero para ser procesado en las plantas de beneficio de la empresa (Entrevista con mineros de pequeña escala de Segovia, 2015; Entrevista con consultores de RSC de compañías mineras en Antioquia, 2015).

Todas las otras empresas mineras presentes en el departamento (más de doce empresas *junior*, en su mayoría internacionales) están aún en etapa de exploración. Muchas de estas empresas exploradoras han desistido de su inversión y han salido del país. Como se mencionó anteriormente, aún hay varias empresas desarrollando sus proyectos y esperan comenzar a producir en los próximos años.

Fundiciones, refinadoras y comercializadoras internacionales

Antioquia es el principal centro para comercializadoras de oro internacionales y fundiciones. Durante más de un siglo Medellín ha sido la sede de las tres fundiciones/refinadoras más grandes de Colombia: Fundición Escobar, Fundición Álvarez y Fundición Gutiérrez. Durante la década de los ochenta, se sospechaba que estas empresas familiares servían como centros de lavado de dinero para los carteles. El panorama evolucionó rápidamente: fusiones, bancarrotas y otros escándalos propiciaron la entrada de nuevos actores al negocio. De quince fundiciones/refinadores que había en Medellín hace diez años, hoy sólo quedan cinco o seis.

La Fundición Gutiérrez mantuvo sus operaciones, pero una rama de la misma familia fundó CI CIGSA, una comercializadora internacional, fundición y refinadora. CI CIGSA fue comprada por Gran Colombia Gold en 2012 y en 2015 fue vendida a Sun Valley, un fondo de inversión que buscaba exportar a la India (Entrevista con ejecutivo de comercializadora internacional de oro, 2015). Fundición Escobar cerró en 2012 y Fundición Álvarez estableció su propia comercializadora internacional: C.I. Metales y Derivados S.A., que luego cerró. A comienzos de la década del 2000 también surgió un nuevo grupo de comercializadoras internacionales, fundiciones y refinadoras, incluyendo C.I. Metales Hermanos, C.I. Goldex, C.I. de Metales Preciosos de Colombia, Sociedad Comercializadora Internacional S & JIL, SCI Antioqueña de Exportación, C.I. del Nordeste Antioqueño. Con el liderazgo de Goldex, estas compañías (con la excepción de CIIGSA) establecieron ACOMI, una asociación empresarial con el fin de promover sus intereses. Muchas de estas comercializadoras internacionales están en aprietos financieros hoy en día debido a la implementación del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), el cual las obliga a presentar certificados de origen para todo el oro del que se abastezcan (Entrevista con director de asociación de comercializadoras internacionales de oro, 2015).

Compraventas

Además de comercializadoras internacionales, refinadoras y fundiciones, también hay un gran número de pequeñas comercializadoras y compraventas en el departamento. Aunque algunas están ubicadas en Medellín, la mayoría se encuentra en las cabeceras municipales cercanas a las minas. Según un experto en minería local, hay más de 50 compraventas operando en El Bagre, más de 40 en Segovia y entre 30 y 40 en Buriticá (Entrevista con mineros de pequeña escala de Segovia, 2015; Entrevista con mineros de pequeña escala de Buriticá, 2015).

Las pequeñas comercializadoras y compraventas también se han visto perjudicadas como resultado de la implementación del RUCOM. Tradicionalmente, las compraventas le vendían su oro a comercializadoras de mayor tamaño o a comercializadoras internacionales en Medellín. Algunas comercializadoras internacionales tenían acuerdos de exclusividad con compraventas locales e incluso les proporcionaban el capital necesario para establecer sus operaciones (entrevista). A su vez, las compraventas le daban capital de inversión a los pequeños mineros a cambio de su producción futura. Hoy en día, las comercializadoras internacionales evitan comprarle a las compraventas para comprarle directamente a los pequeños mineros con título. Como resultado, ha aumentado la tensión entre las compraventas y las comercializadoras internacionales.

Vínculos entre minería aurífera, conflicto armado y dinámicas criminales

En Antioquia existe una clara superposición entre la minería aurífera y las dinámicas del conflicto. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales están presentes en al menos 30 municipios donde hay minería de oro de pequeña escala no autorizada en el departamento (Ministerio de Defensa, 2015). Como en el resto del país, el oro se ha convertido en una importante fuente de financiamiento para los grupos armados ilegales presentes en Antioquia (OCDE, 2016).

Aunque la presencia de grupos guerrilleros en el departamento data de principios de los años setenta, su influencia era relativamente esporádica hasta la aparición de las plantaciones de coca en los ochenta. Durante los noventa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lograron expandirse en el departamento, principalmente en los barrios pobres de Medellín y en las regiones mineras del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño. Sin embargo, el auge de los grupos paramilitares y autodefensas detuvo la expansión. Tanto las FARC como el ELN establecieron vínculos con las comunidades mineras de estas regiones e intentaron tener influencia sobre los sindicatos de las minas de oro de Frontino.

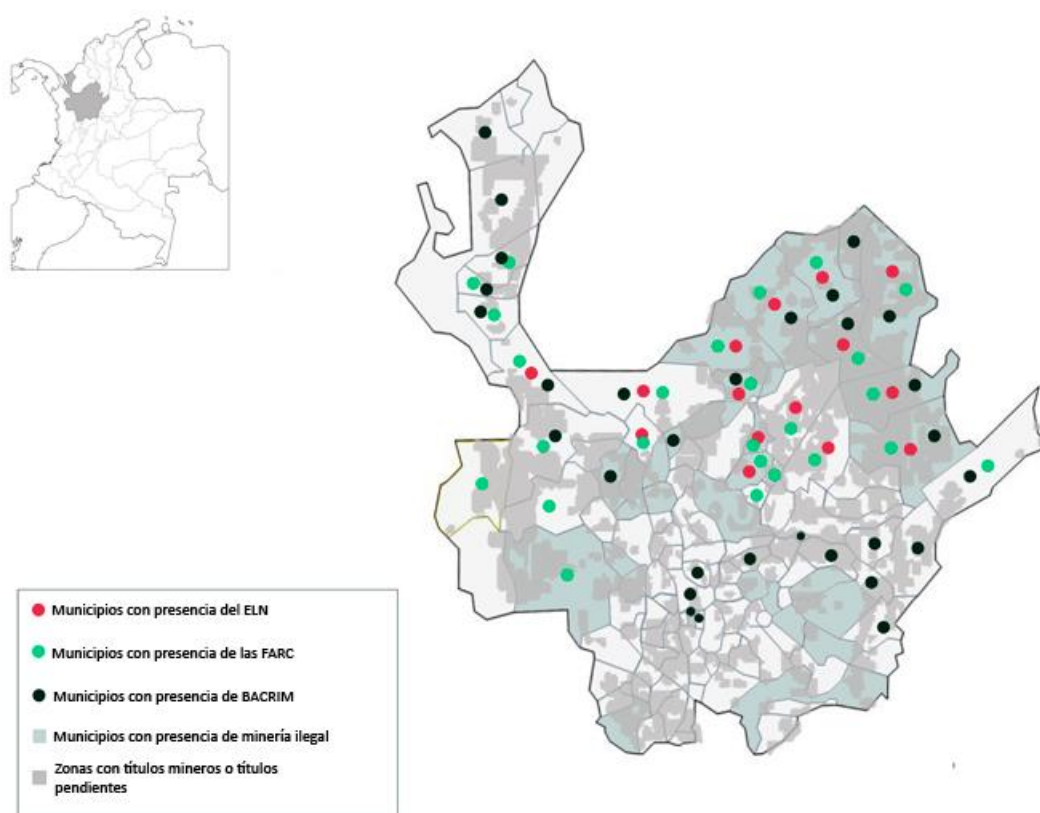
Durante la década de los noventa se expandieron los grupos paramilitares provenientes del Magdalena medio y del vecino departamento de Córdoba. El primer comandante paramilitar en establecer una presencia fuerte en los municipios mineros fue Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, cuando creó los Bloques Mineros. Poco tiempo después, otro comandante paramilitar, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, consolidó la influencia del Bloque Central Bolívar sobre Segovia. Se sospecha que, tanto Vanoy como Macaco, han invertido en minas de oro (se sospecha que en su auge, Macaco tenía más de 50 operaciones mineras) y compraventas locales de oro (El Colombiano, 2010).

Luego del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 y la extradición de Macaco y Vanoy a los EEUU en 2008 por cargos de narcotráfico, algunos mandos medios de los antiguos grupos paramilitares y los nuevos cabecillas criminales locales establecieron nuevas organizaciones en un intento por retomar control sobre las regiones mineras. Desde entonces, ha

habido una lucha por el control de estas regiones entre el Clan Úsuga (presente en el Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca), los Paisas y los Rastrojos (ambos presentes en el Bajo Cauca).

Paralelamente, las FARC, y últimamente el ELN, han mantenido gran influencia sobre las regiones del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, y su relación con estas nuevas organizaciones criminales ha oscilado entre el enfrentamiento y la coexistencia. Hoy en día las FARC (frentes 9, 18, 34, 36 y 58), el ELN (con sus frentes José Antonio Galán, Héroes y Mártires de Anorí, Capitán Mauricio y Compañero Tomás) y el Clan Úsuga se han dividido el control de estos territorios mineros en Antioquia.

Figura 3: Mapa de zonas mineras, municipios con presencia de minería ilegal y presencia de actores armados no estatales y organizaciones criminales en Antioquia



Fuente: Elaboración por los autores con información de la Policía Nacional de Colombia del 2015 sobre presencia de minería ilegal; Fundación Paz y Reconciliación de 2015 sobre presencia de actores armados no estatales y organizaciones criminales; Catastro Minero Colombiano para zonas con solicitud de títulos actuales o pendientes del 2014.

Prevalencia de Riesgos del Anexo II de la Guía en Antioquia

Serios abusos asociados con la extracción, transporte y comercialización de oro

Peores formas de trabajo infantil

Las autoridades han expresado su preocupación acerca del trabajo forzoso de niños en Antioquia. Varios informes han llamado la atención sobre el reclutamiento de niños por parte de actores armados ilegales u organizaciones criminales para actividades relacionadas de manera directa o indirecta con la minería. En 2015 la Defensoría del Pueblo recibió reportes de que en Medellín se estaban reclutando niñas menores de edad provenientes del Chocó para ser prostituidas en los municipios mineros de la subregión del Bajo Cauca (entrevista con funcionarios de la Defensoría del Pueblo en Antioquia, 2015). Un periodista de la región también hizo mención de reportes aislados de grupos criminales (específicamente los Urabeños y los Rastrojos) que reclutaban niños a comienzos del 2015 en los municipios del Bajo Cauca con el fin de llevarlos a trabajar en operaciones mineras bajo su control directo (entrevista con reportero local, 2015). Esto coincide con las prácticas empleadas anteriormente por los grupos paramilitares que operaban en los municipios antioqueños, en las cuales las madres reportaban que los niños eran sacados de sus hogares para trabajar en sitios mineros (Fiscalía General de la Nación, 2014).

También ha sido un reto, tanto para las grandes compañías mineras como para las pequeñas operaciones, evitar que sus empleados frecuenten los prostíbulos locales, en los cuales se han descubierto casos de prostitución infantil (entrevista con agente de la policía local, 2015; entrevista con funcionario de ONG para los derechos de los niños, 2016). Aunque las grandes compañías mineras tienen estrictos códigos de conducta para sus empleados y se suelen imponer sanciones por conducta indebida, pueden ser muy difíciles de monitorear por fuera de la planta de operaciones y durante el tiempo libre de los empleados. Muchos de estos prostíbulos locales suelen ser controlados por redes criminales vinculadas con la minería ilegal, o le pagan dinero de extorsión a actores armados ilegales (entrevista con minero local de El Bagre, 2015; entrevista con minero local de Buriticá, 2015).

Las comercializadoras locales e internacionales entrevistadas en Antioquia no contaban con un mecanismo específico para identificar si sus proveedores empleaban alguna de las peores formas de trabajo infantil en sus operaciones. La mayoría asume que comprar a proveedores con títulos mineros legales o proveedores autorizados (por ejemplo, barequeros) implica un respeto implícito por los derechos de los niños (entrevista con director de asociación de comercializadoras internacionales, 2015). Aunque al menos dos de las fundiciones entrevistadas mencionaron que estaban realizando visitas de campo a algunos de los sitios mineros de sus mayores proveedores, no está claro si sus visitas de monitoreo incluyen una evaluación sistemática de las peores formas de trabajo infantil en actividades mineras.

Además del reclutamiento forzado de niños por parte de actores no estatales para prostitución infantil y trabajo forzoso, en las operaciones mineras los niños suelen realizar tareas que se encuentran en un área gris entre tareas domésticas y trabajo potencialmente peligroso en ambientes insalubres. Algunos estudios de la Organización Internacional del Trabajo y Fedesarrollo han señalado que la minería de subsistencia y de pequeña escala en departamentos como Chocó y Antioquia suele involucrar a los miembros de la familia en las operaciones mineras (OIT, 2001; Goñi et al., 2014). En 2012, como parte de un estudio de línea de base para el desarrollo de una nueva política que buscaba erradicar las peores formas de trabajo infantil, el Ministerio de Trabajo

identificó que existía riesgo de trabajo forzoso en actividades mineras en al menos cuatro municipios antioqueños: Amagá, Nechí, Segovia y Angelópolis (Ministerio de Trabajo, 2012). En 2013, el Ministerio de Trabajo reportó más de 17.600 casos de peores formas de trabajo infantil en Antioquia, de los cuales 3.700 estaban relacionadas con actividades mineras y más de 5.900 se encontraban en los 10 principales municipios productores de oro (Ministerio de Trabajo, 2013).

En los municipios mineros de Antioquia, la línea entre tareas domésticas y peores formas de trabajo infantil suele ser borrosa. En algunos casos se le pide a los niños realizar pequeñas tareas, pero en otros, realizan tareas de selección de mineral y barequeo (entrevista con minero local de El Bagre, 2015). Al parecer, también sirven como táctica para "aumentar capacidad" cuando hay incentivos para aumentar la producción de oro (por ejemplo, un aumento en los precios o el descubrimiento de un sitio minero con buenos indicios). Durante este tiempo pueden estar expuestos a condiciones peligrosas, como trabajar cerca de maquinaria pesada y el uso de mercurio (entrevista con experto en minería en Antioquia, 2015). Basado en visitas de campo a sitios mineros en el 2014, la Defensoría del Pueblo reportó que en municipios como Angostura y El Bagre durante los auge mineros las familias retiraban a sus hijos del colegio para participar en actividades mineras (entrevista con funcionario de la Defensoría del Pueblo en Antioquia, 2015).

Aunque aún no está claro el grado en el cual los mineros de subsistencia y de pequeña escala emplean niños, es probable que sea una práctica más común entre los mineros sin títulos y los barequeros. Los mineros de pequeña escala con títulos mineros que fueron entrevistados mostraron tener un conocimiento básico de las regulaciones sobre trabajo infantil en actividades mineras (entrevista con minero de pequeña escala de Buriticá, 2015; entrevista con minero de pequeña escala de Andes, 2015). Los mineros de El Bagre señalaron que, aunque esta práctica es cada vez menos común en las operaciones mineras de pequeña escala, en este municipio la minería de subsistencia aluvial (o barequeo) aún involucra a toda la familia (entrevista con minero de pequeña escala de El Bagre, 2015).

A pesar de sus limitaciones, Antioquia cuenta con una de las oficinas regionales más activas de inspección laboral, y con 50-70 inspectores de trabajo que cubren todos los sectores (ENS, 2016). Aunque las visitas suelen ser esporádicas y rara vez se ponen en marcha investigaciones formales contra los mineros auríferos, las fuentes en los sitios mineros de El Bagre señalan que los inspectores de trabajo han visitado sitios mineros (es importante señalar que los inspectores de trabajo no tienen la obligación de monitorear operaciones ilegales, que es donde suele ser más común el trabajo infantil) (entrevista con minero de pequeña escala de El Bagre, 2015). Para remediar esto, desde el 2010 el Ministerio de Trabajo, la Gobernación de Antioquia, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) y varias organizaciones de la sociedad civil han venido implementando una serie de iniciativas para educar a las comunidades mineras sobre las peores formas de trabajo infantil, han trabajado con los niños para reducir la deserción escolar y han mejorado los beneficios de salud para los niños. Aunque estos programas han beneficiado a más de 2.000 niños en los municipios de la subregión del Bajo Cauca, ciertas fuentes que han trabajado en estos proyectos señalan que en las actividades mineras aún persiste el trabajo infantil (entrevista con funcionario de la Defensoría del Pueblo en Antioquia, 2015; entrevista con funcionario de ONG para los derechos de los niños, 2016).

Algunas empresas mineras de gran escala también desean mejorar su debida diligencia en relación con las peores formas de trabajo infantil. Por ejemplo, Mineros S.A. creó una cuenta correo electrónico donde recibe denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de sus empleados o proveedores, incluyendo las peores formas de trabajo infantil. Como parte de su

compromiso con la Global Reporting Initiative, Mineros S.A. también espera establecer un mecanismo para monitorear y reportar sus esfuerzos y asegurar que su cadena de suministros esté libre de trabajo infantil. Recientemente, Mineros S.A. y Continental Gold se unieron a la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, un grupo de compañías encabezadas por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo para apoyar la estrategia gubernamental para eliminar las peores formas de trabajo infantil. En 2012, tanto Mineros S.A. como Gran Colombia Gold habían adherido al código de conducta de la industria de la Asociación de Minería a Gran Escala (hoy en día llamada Asociación Colombiana de Minería) con lo cual reafirmaron su compromiso con "los estándares internacionales relacionados con el trabajo infantil". A pesar de que la Asociación Colombiana de Minería monitorea la adhesión de sus miembros a este principio, las empresas no han estado reportando sus progresos a la asociación de manera rigurosa (entrevista con funcionario de la Asociación Colombiana de Minería, 2016).

Crímenes de guerra u otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, crímenes contra la humanidad o genocidio

Los grupos armados no estatales que reciben ingresos de las operaciones mineras en Antioquia continúan cometiendo transgresiones consideradas como crímenes de guerra o violaciones al derecho internacional humanitario. Varios frentes de las FARC, como los frentes 36, 18 y 34, aún emplean estas prácticas. Aunque en menor medida que en el pasado, algunos de estos frentes continúan realizando asesinatos selectivos de civiles como represalia contra aquellos individuos que no se ajustan a sus intereses. Desde el 2010 los medios de comunicación, ONGs de derechos humanos y agencias de orden público han registrado una serie de asesinatos selectivos de líderes comunitarios, candidatos electorales o terratenientes que se rehúsan a pagar extorsiones (CINEP, 2016; Fiscalía General de la Nación, 2015). Sin embargo, de manera más reciente, estos frentes están recurriendo a la restricción de movilidad, incluyendo la destrucción de vehículos y el bloqueo de carreteras, emboscadas con explosivos y amenazas a líderes comunitarios y autoridades civiles para mantener el control de la población (CINEP, 2016; Fiscalía General de la Nación, 2016). Las autoridades también han acusado a estos frentes de reclutamiento forzoso de niños y el uso indiscriminado de minas antipersona (Fiscalía General de la Nación, 2016). A pesar de que el número de víctimas ha caído de manera constante cada año desde el 2010, el uso de minas antipersona por parte de las FARC y el ELN ha causado más de diez accidentes de civiles en los diez principales municipios productores de oro en Antioquia (DAICMA, 2016).

Desde 2012, los frentes del ELN han estado cada vez más activos en los municipios del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, lo cual ha llevado a un aumento en el número de violaciones de derechos humanos por parte de este grupo. Frentes como Capitán Mauricio, Compañero Tomás, Héroes de Tarazá, José Antonio Galán y Héroes y Mártires de Anorí han reforzado sus operaciones para restablecer su control sobre las poblaciones y sus ingresos por extorsión en regiones donde las BACRIM también han consolidado su presencia. Tanto ONGs de derechos humanos como fuentes de los medios de comunicación han reportado restricciones a la movilidad (bloqueos de carreteras y amenazas a transportadores en febrero del 2016), el asesinato selectivo de un minero a mediados del 2015 y tres secuestros de civiles que se rehusaron a pagar extorsiones a este grupo (CINEP, 2016; Fiscalía General de la Nación, 2016). Estos frentes del ELN también están lanzando cada vez más emboscadas con explosivos a guarniciones del ejército y la policía, hiriendo civiles en el proceso, y aún emplean el uso indiscriminado de minas antipersona (Ejército Nacional de Colombia, 2015).

Actualmente, las facciones de las BACRIM (sobre las cuales existe un debate sobre si considerarlas como un actor no estatal sujeto al derecho internacional humanitario) que operan en los municipios

mineros son los responsables por la mayor cantidad de este tipo de violaciones. La lucha interna entre estos grupos por control territorial ha llevado a asesinatos selectivos y a amenazas sistemáticas contra civiles. El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), un centro de investigaciones colombiano, registró al menos diez asesinatos de mineros de pequeña escala en Cauca, Segovia y Remedios desde el 2010 en una batalla sobre el control de ingresos de extorsión entre los Rastrojos y los Urabeños (CINEP, 2016). Estos grupos también son responsables por el asesinato de líderes indígenas, dueños de tiendas, campesinos y transportadores en estos municipios, y han amenazado comunidades mediante medidas que incluyen la imposición de toques de queda y restricciones a la movilidad (CINEP, 2016). Adicionalmente, las fuentes en los medios de comunicación han reportado un reclutamiento generalizado de niños en los municipios mineros de Antioquia por parte de estos grupos (VerdadAbierta, 2013; entrevista con funcionario de la Defensoría del Pueblo, 2015).

Desplazamiento forzado y apropiación ilegal de títulos de propiedad⁶

Como se ha mencionado anteriormente, los mineros de pequeña escala y los mineros de subsistencia suelen ser víctimas de desplazamiento forzado. Según la Unidad de Víctimas de Colombia, el 8% de los desplazamientos internos registrados en Antioquia (hay más de 124.000 casos) ha ocurrido en los seis principales municipios productores de oro del departamento. Un ejemplo reciente de desplazamiento forzado ocurrió entre 2011 y 2012 en Segovia cuando los Urabeños y una facción de los Rastrojos se disputaron el control sobre unos pequeños mineros, lo que disparó el número de casos de desplazamiento forzado de 399 en el 2011 a 2.319 casos en el 2012 (Unidad de Víctimas, 2016).

Debido a las altas tasas históricas de desplazamiento en los municipios auríferos de Antioquia, existe el riesgo de que algunas operaciones (en particular operaciones de pequeña minería ilegal) puedan llevarse a cabo en tierras que fueron apropiadas de manera ilegal por terceros.

Generalmente, hay dos tipos de ocupación ilegal: mineros que desprevenidamente ocuparon o compraron estas tierras y aquellos que se han beneficiado de manera intencional de las tierras dejadas por las víctimas. Aunque la ocupación o compra desprevenida es el caso más común, hay reportes anecdóticos de antiguos paramilitares que compraron sitios mineros en Antioquia forzando a los dueños a vender (Rama Judicial, 2010). Adicionalmente, los mineros que fueron entrevistados en El Bagre y Segovia señalaron que aún ocurren despojos forzados de minas. Por ejemplo, en el 2014 en Rio Bagre, una vereda del municipio de El Bagre, las FARC enviaron testaferros para presionar a los mineros locales a vender sus propiedades (entrevista con mineros de pequeña escala de El Bagre, 2015).

Las autoridades y las compañías mineras de gran escala han tenido avances en cuanto a la identificación de riesgos relacionados con los títulos de propiedad de la tierra, pero los pequeños mineros, las compraventas locales y las comercializadoras internacionales en Medellín, no han avanzado. Desde el 2014, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Minería están trabajando juntas, revisando de manera sistemática las solicitudes de restitución de tierras para encontrar cuáles coinciden con títulos mineros y solicitudes de legalización por parte de pequeños mineros. Sin embargo, debido a que sólo un pequeño número de casos de víctimas de restitución de tierras irá a juicio, es difícil determinar la verdadera magnitud de la coincidencia.

Cada vez más, las grandes empresas mineras están buscando mitigar el riesgo de que sus títulos coincidan con procesos de restitución de tierras. Algunas están contratando consultorías jurídicas

para realizar una revisión exhaustiva de los antecedentes criminales de los titulares de las tierras compradas para sus operaciones (entrevista con funcionario de empresa de minería de gran escala en Antioquia, 2015; entrevista con funcionario de Asociación Colombiana de Minería, 2016). Otras empresas se están acercando directamente a la Unidad de Restitución de Tierras y a la Agencia Nacional de Minería para obtener registros oficiales de restitución de tierras. Por otra parte, los mineros de pequeña escala y las compraventas locales de oro no han adoptado ningún mecanismo para evaluar este riesgo. Las comercializadoras internacionales de oro en Medellín han señalado su preocupación por abastecerse de proveedores cuyos sitios mineros puedan coincidir con procesos de restitución de tierras, pero aún no han implementado un chequeo sistemático de antecedentes para mitigar este riesgo (Entrevista con director de asociación de comercializadoras internacionales de oro, 2015).

Apoyo directo o indirecto a grupos armados no estatales

A diferencia de lo que hacían los grupos paramilitares en los años noventa, las BACRIM y los grupos guerrilleros presentes en Antioquia hoy en día rara vez poseen minas. Aunque hay fuertes sospechas de que algunos líderes invirtieron en minas a través de empresas fachada, en la mayoría de los casos estos grupos prefieren extorsionar a quienes trabajan en las minas ubicadas en las áreas bajo su control, en lugar de operar las minas directamente.

No obstante, la línea entre operar las minas de manera directa y extorsionar a los mineros y a las comunidades mineras suele ser borrosa. En algunos casos, estos grupos armados han incentivado invasiones ilegales y ocupaciones de minas, por ejemplo, el ELN en Segovia en el 2011. En otros casos, prefieren controlar o infiltrarse en asociaciones mineras. Por ejemplo, hay fuentes que sostienen que Sintraminergética, un sindicato minero con una fuerte presencia en Segovia, fue creado por las FARC y más adelante algunos de sus miembros establecieron vínculos con el líder paramilitar alias Macaco. Otras asociaciones de mineros, como Asodragan en El Bagre, han sido acusadas de incluir antiguos paramilitares entre sus miembros.

Según los testimonios, en algunas ocasiones las BACRIM presionan a los mineros locales para que les permitan a los mineros de las BACRIM ingresar a las minas una vez por semana para extraer mineral aurífero como forma de pago de extorsión. Los minerales son extraídos de la mina y almacenados en propiedades adyacentes mientras esperan ser procesados por plantas de beneficio y fundiciones locales. Aunque este tipo de pago en especie requiere una mayor logística, suele ser más difícil para las autoridades detectar minerales y arenas auríferas (entrevista con minero de pequeña escala de Segovia, 2015; entrevista con agente de la policía, 2015).

Los grupos armados ilegales en Antioquia también reciben ingresos de otros actores a lo largo de la cadena de suministros de oro. Aunque los grupos armados ilegales no poseen o tienen control directo sobre la mayoría de las plantas de beneficio, sus dueños suelen ser forzados a pagar para poder operar.

Una de las mayores fuentes de ingresos de los grupos guerrilleros y las BACRIM es la extorsión de los proveedores de servicios a mineros de pequeña escala. Miles de operadores de retroexcavadoras y buldóceres a lo largo del departamento deben pagar una cuota de extorsión de entre USD \$1.000-1.500 mensuales para poder entrar a ciertas áreas. Las fuentes locales estiman que únicamente en los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca hay un promedio de tres retroexcavadoras o buldóceres operando en cada uno de los 1.200 sitios mineros no autorizados. En el Nordeste antioqueño operan entre 500 y 800 máquinas y la situación es muy similar.

Según estimaciones, únicamente en el Bajo Cauca, las BACRIM, las FARC y el ELN obtienen cada una hasta USD \$1,5 millones de los USD \$15 millones mensuales que produce la minería de oro en la región. En Segovia se reporta que cada día se mueven más de USD \$1 millón. Los paramilitares y los grupos guerrilleros solían justificar sus prácticas como un impuesto para financiar su lucha y proteger a los mineros de otros grupos armados ilegales. Hoy en día, sin embargo, los grupos armados ilegales también argumentan que le cobran los impuestos a los mineros para protegerlos en contra de las autoridades que buscan sacarlos del negocio al imponerles umbrales regulatorios imposibles de alcanzar.

Aunque la extorsión y el control de las áreas mineras sigue siendo un problema para la minería artesanal y de pequeña escala, la extorsión de grandes empresas mineras parece ser cada vez menos generalizada. Según los mineros locales entrevistados para este estudio, las grandes empresas mineras han dejado de pagarle extorsiones de manera sistemática a los grupos guerrilleros como solía suceder (por ejemplo, como el caso de Mineros S.A.). Sin embargo, otras fuentes sugieren que esos grupos armados ilegales aún recurren al uso de la fuerza, amenazas o intimidación cuando se trata de grandes empresas mineras. En el 2015, por ejemplo, una de las BACRIM presentes en el municipio de Segovia asesinó a dos empleados de uno de los proveedores de Gran Colombia Gold debido a que, al parecer, la empresa había decidido no pagar la extorsión (El Colombiano, 2015). Otras fuentes le informaron a los autores que el proveedor tenía vínculos con organizaciones criminales.

En otras regiones, como en el municipio de Buriticá, hasta el 2014 los reportes indicaban que la extorsión era más sutil o sofisticada. En lugar de pagar la extorsión de manera directa, o de ceder al chantaje, al parecer algunos empleados cooperaban con los grupos armados ilegales al permitirles beneficiarse de la información geológica de la empresa y operar dentro de (o junto a) sus concesiones legales (entrevista con mineros de pequeña escala de Buriticá, 2015; entrevista con agentes de la policía, 2015). Una empresa de este municipio se está sometiendo a una revisión completa de sus mecanismos de debida diligencia y está buscando cumplir con algunos de los más altos estándares de la industria, incluyendo aquellos de la Corporación Financiera Internacional, el Consejo Internacional de Minería y Metales y el Consejo Mundial del Oro.

Fuerzas de seguridad públicas o privadas

En cierta medida, las grandes empresas mineras en Antioquia (ver apartado anterior sobre extorsión) no se ven afectadas por los grupos armados ilegales debido a la protección prestada por las compañías de seguridad privada y las fuerzas de seguridad estatales. No obstante, el historial en materia de derechos humanos de estas fuerzas suele ser cuestionado por ONGs locales. Empresas como Mineros S.A. en El Bagre, Gran Colombia Gold en Segovia (ambas en etapa de producción) y Continental Gold en Buriticá y Anglo Gold Ashanti – B2Gold en San Roque (ambas en etapas avanzadas de exploración y licenciamiento ambiental) han firmado acuerdos con el Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad de sus operaciones a cambio de contribuciones financieras o la compra de maquinaria (OCDE, 2016). Aunque estos acuerdos no son públicos, las fuentes consultadas para esta evaluación señalaron que incluyen cláusulas de adhesión a estándares de derechos humanos (entrevista con antiguo funcionario del gobierno y experto en seguridad, 2015). El Ministerio de Defensa y empresas como Anglo Gold Ashanti también se han suscrito a la implementación de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.⁷ Los funcionarios de la empresa tienen contacto permanente con unidades del ejército y algunos investigan su historial en materia de derechos humanos; sin embargo no está claro si esto se realiza de manera

sistemática (entrevista con funcionario de empresa minera de gran escala en Antioquia, 2015; entrevista con antiguo funcionario del gobierno y experto en seguridad, 2015).

Aunque el historial en materia de derechos humanos de las unidades del ejército en las regiones mineras de Antioquia ha mejorado drásticamente durante la última década, las organizaciones locales todavía reportan algunos casos aislados de abusos. En Segovia, por ejemplo, el Batallón Especial Energético y Vial No. 8 fue creado en 2001 para proteger el oleoducto y las operaciones mineras en los municipios de Segovia y Remedios. En 2007, algunos miembros de esta unidad fueron acusados de participar en la ejecución extrajudicial de al menos un civil (Fiscalía General de la Nación, 2015). Ningún caso similar ha sido registrado desde entonces. Sin embargo, algunas organizaciones de base locales, como la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAUCOPANA), han presentado denuncias en contra de unidades del ejército por uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas de miembros de la comunidad. El ejército sospecha que algunas de estas comunidades están colaborando con grupos guerrilleros ya que las FARC y el ELN han tenido una presencia histórica en la región.

Las fuerzas de seguridad, y en particular la Policía Nacional, están bajo presión como resultado de las tensiones entre los mineros de pequeña escala no autorizados y las grandes compañías mineras. Los alcaldes locales y las fuerzas de policía tienen la obligación legal de desalojar a los pequeños mineros de las concesiones legales. Desde 2012, en los municipios de Segovia y Buriticá, Gran Colombia Gold y Continental Gold han denunciado la presencia de mineros no autorizados en sus concesiones, lo cual ha dado lugar a órdenes de desalojo. Esto ha llevado a protestas por parte de pequeños mineros y enfrentamientos con la policía. La muerte de varios manifestantes en Segovia en 2011 y en Buriticá en 2013 suscitó la preocupación de que los líderes mineros podían estar siendo perseguidos. Las autoridades han lanzado una serie de exitosos procesos de mediación con pequeños mineros para reducir la tensión, no obstante, en la mayoría de los casos no han podido ofrecer la protección adecuada para los líderes o judicializar a los responsables por los abusos.

En abril del 2016, el Ministerio de Defensa lanzó una operación conjunta para clausurar minas ilegales y pequeñas plantas de beneficio en Buriticá, basado en lecciones de experiencias pasadas. A diferencia de las operaciones anteriores, el gobierno reporta que en esta participaban fuerzas de seguridad, agencias de orden público, autoridades de minería y autoridades civiles, y se diseñó una cuidadosa estrategia de mitigación de riesgo para reducir el potencial impacto sobre las comunidades, los mineros locales y los activos de la empresa. Las autoridades esperan que en el futuro este se convierta en el modelo para este tipo de operaciones de desalojo.

Sobornos y tergiversación del origen del oro

La implementación del Registro Único de Comercializadores Mineros (RUCOM), el cual le exige a las comercializadoras y transportadores de minerales tener un certificado del origen de su oro, llevó al descubrimiento de que gran parte del oro de las compraventas locales y comercializadoras internacionales provenía de proveedores no autorizados en Antioquia. Entre febrero y abril del 2015, las compraventas locales y las comercializadoras internacionales redujeron de manera significativa la cantidad de oro que compraban debido a que sus proveedores no contaban con un registro oficial. Desde abril del 2015, tanto las compraventas locales como las comercializadoras internacionales han comenzado a abastecerse de proveedores autorizados. Muchas se han comenzado a abastecer de barequeros, ya que son difíciles de rastrear y no están siendo monitoreados por la Agencia Nacional de Minería; además, se pueden registrar rápidamente en su alcaldía local. Esta práctica ya tiene por nombre “pitufeo”, y es utilizada por las organizaciones

criminales como forma de lavar dinero a través de un gran número de pequeñas transacciones bancarias y de casas de cambio. Por ejemplo, una comercializadora internacional entrevistada en Medellín pasó rápidamente a comprarle el 70% de su oro a los barequeros para junio del 2015, y afirmaba que algunos de sus proveedores tradicionales de pequeña escala habían sido dejados por fuera injustamente a causa de los programas de legalización del gobierno (entrevista con director de asociación de comercializadoras internacionales de oro, 2015). El Ministerio de Minas ya ha identificado este problema y está estableciendo un límite máximo a la cantidad que cada barequero puede producir (entrevista con asesores del Ministerio de Minas, 2015).

Las autoridades también están investigando otros métodos mediante los cuales las comercializadoras de oro tergiversan el origen de los minerales. En el 2014, el caso de C.I. Goldex, una conocida comercializadora de oro de Medellín, reveló cómo las compraventas locales de oro establecían empresas fachada en municipios mineros para comprar oro de proveedores ilegales, incluyendo oro de minas en áreas controladas por las FARC y minas controladas directamente por los Urabeños. La falsificación de números de identificación también ha sido utilizada como forma de justificar compras a individuos (entrevista con agentes de la policía, 2015). La Fiscalía General de la Nación está realizando investigaciones preliminares de otras comercializadoras internacionales de oro (en gran parte ubicadas Medellín) y ha encontrado que un gran número ha empleado prácticas similares tradicionalmente (entrevista con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, 2016). Más aún, varias comercializadoras internacionales de oro solían abastecerse de asociaciones locales de minería: organizaciones encargadas de consolidar las pequeñas cantidades producidas por sus miembros. También se sospecha que estas asociaciones tergiversan el origen exacto del oro que le venden a las comercializadoras. Por ejemplo, se sospecha que Asomineros del Bajo Cauca, un grupo minero con gran influencia en la región, tiene vínculos con grupos armados ilegales (entrevista con mineros de pequeña escala de El Bagre, 2015).

Los pequeños mineros ilegales han recurrido a nuevas formas de “legalizar” el oro que producen debido a la presión de legalización y formalización por parte de las autoridades, so pena de ser perseguidos. De acuerdo con los mineros locales entrevistados para este estudio, los pequeños mineros ilegales de Buriticá están llevando su oro a operaciones mineras autorizadas ubicadas en los municipios de Amalfi y Segovia, las cuales declaran la producción como suya. Los mineros de Segovia también mencionan que esta práctica es común entre los pequeños mineros autorizados y los no autorizados de Segovia (entrevista con mineros de pequeña escala de Segovia, 2015).

La implementación del RUCOM también destapó un mercado clandestino de oro. Una fuente que solía trabajar en esfuerzos de las autoridades contra la minería ilegal señaló que durante la primera mitad del 2015 habían recibido información de que grandes cantidades de oro provenientes de Antioquia habían sido sacadas por el mercado negro por Venezuela hacia el Caribe y vendidas a supuestos compradores chinos a precios menores que los oficiales del mercado (entrevista con antiguo funcionario del gobierno y experto en seguridad, 2015). Otras fuentes mencionaron que Brasil, y en menor medida Panamá, eran destinos potenciales para el oro de contrabando (entrevistas). Según esta fuente, las rutas utilizadas para contrabandear oro fuera de Colombia son similares a las rutas utilizadas por el crimen organizado para narcotráfico. Como medida contra el oro que ingresa a Colombia por contrabando de otros países latinoamericanos para luego ser reexportado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha comenzado a utilizar espectrómetros en su zona aduaneras en Medellín para verificar la pureza de las importaciones y exportaciones de oro (entrevista con comercializadora internacional de oro, 2015).

En Antioquia, las nuevas regulaciones y acciones coactivas por parte de las autoridades están obligando a las comercializadoras internacionales de oro a comenzar a implementar medidas de debida diligencia. Las regulaciones de seguros de la DIAN (OCDE, 2016) han obligado a las comercializadoras internacionales de oro a someterse a evaluaciones financieras por parte de compañías de seguros y bancos. Una comercializadora internacional ubicada en Medellín señaló que un banco se había negado a otorgarles un crédito luego de realizar una evaluación de riesgo financiero. Además, la Policía Nacional ha confiscado el oro de las comercializadoras que no puedan presentar un certificado de origen (entrevista con director de asociación de comercializadoras internacionales de oro, 2015). Más aún, debido a la falta de transparencia y denuncias de tergiversaciones fraudulentas del origen del oro comprado, los mineros de gran escala en Antioquia como Mineros S.A. han dejado de venderle a comercializadoras internacionales de oro y han comenzado a negociar directamente con refinadoras internacionales. Otras compañías mineras de mediana escala están estableciendo sus operaciones comerciales en zonas de libre cambio en Medellín para evitar hacer negocios con las comercializadoras internacionales (entrevista con comercializadora internacional de oro, 2015).

Para abordar esta creciente presión, las comercializadoras internacionales de oro han comenzado a implementar prácticas básicas de debida diligencia. Recientemente, dos de las comercializadoras entrevistadas contrataron firmas de evaluación de riesgo para revisar los antecedentes de sus proveedores. Una de estas firmas utiliza antecedentes penales, listas de narcotráfico y lavado de dinero del gobierno de los EEUU, registros fiscales y fuentes abiertas para revisar los antecedentes individuales de cada uno de los proveedores además de nombrar a un responsable por el cumplimiento con el fin de monitorear su cadena de suministros. Otra comercializadora internacional mencionó que planeaba rediseñar por completo su cadena de suministros, dejaría de comerciar con pequeños mineros para enfocarse en operaciones de mediana escala y realizaría visitas de campo para asegurarse de que los proveedores de oro cumplieran con los estándares legales (entrevista con comercializadora internacional de oro, 2015). Adicionalmente, las comercializadoras de oro le han pedido al Ministerio de Minas facilitar un proceso de certificación de debida diligencia de su cadena de suministros y una capacitación para implementarlo (entrevista con director de asociación de comercializadoras internacionales de oro, 2015). Las dos comercializadoras internacionales de oro entrevistadas estaban conscientes de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo y pidieron más información sobre cómo la podían implementar.

Sobornos

En Antioquia, la corrupción por parte de funcionarios gubernamentales se ha generalizado en muchos municipios debido a la debilidad de las instituciones estatales. La corrupción es particularmente común en la cadena de suministros de los pequeños mineros. Los mineros y las autoridades entrevistadas mencionaron la existencia de un mercado negro de explosivos caseros (conocido localmente como polvo loco) y de mercurio manejado por organizaciones criminales en Segovia. Según las acusaciones, estos grupos sobornan a agentes de policía locales para poder operar (entrevista con minero de pequeña escala de Segovia, 2015; entrevista con experto en minería en Antioquia, 2015). En Antioquia, las retroexcavadoras, buldóceres y otra maquinaria llega a los sitios mineros de manera legal desde Medellín o a través de rutas de contrabando desde Venezuela (entrevista con minero de pequeña escala de Andes, 2015). Se tienen reportes de agentes de policía presentes en los puestos de control cerca de los municipios mineros que reciben sobornos para permitir que estos equipos lleguen a los sitios mineros ilegales (entrevista con agente de policía, 2015). Los explosivos legales pueden ser comprados al Ejército, pero hay denuncias de

tráfico de influencias y en algunos casos sobornos para facilitar lo que normalmente es un largo proceso (entrevista con minero de pequeña escala de Andes, 2015; entrevista con antiguo funcionario del gobierno y experto en seguridad, 2015).

Los alcaldes locales son los responsables por cerrar minas ilegales y desalojar mineros no autorizados. Cada vez hay mayor presión por parte de titulares mineros legales y autoridades nacionales para llevar a cabo esta tarea. No obstante, también hay reportes de civiles y agentes de seguridad de bajos rangos que le piden sobornos a los mineros ilegales y a las plantas de beneficio locales para permitirles continuar operando. Por ejemplo, agentes de la policía y mineros locales han confirmado que en Buriticá los mineros ilegales sobornan a la policía local en puestos de control para poder llevar camiones llenos de material sin procesar a las plantas de beneficio en municipios cercanos como Santa Fe (entrevista con agentes de la policía, 2015). Otro minero entrevistado mencionó casos similares de agentes de la policía exigiendo pagos a mineros ilegales en Cáceres (entrevista con experto en minería en Antioquia, 2015).

Para hacer frente a estas prácticas, la Policía Nacional está implementando una serie de medidas que han comenzado a dar resultados. Los agentes de policía en municipios mineros son rotados de manera regular para impedir que sean sobornados. Adicionalmente, las unidades nacionales de élite dedicadas a luchar contra la minería criminal (ver informe general) tienen la capacidad de lanzar operaciones para destruir maquinaria, confiscar oro y capturar mineros vinculados con grupos armados ilegales u organizaciones criminales sin tener que depender de los agentes locales. En Antioquia, algunas de estas operaciones han dado como resultado el procesamiento judicial de agentes de policía locales que estaban colaborando con la minería ilegal y redes de comercio de oro (entrevista con agentes de la policía, 2015; entrevista con antiguo funcionario del gobierno y experto en seguridad, 2015).

A pesar de que las empresas mineras de gran escala que operan en Antioquia tienen estrictos mecanismos de auditoría interna y códigos éticos para impedir la corrupción, hay reportes de corrupción por parte de los empleados de bajo nivel. En Buriticá, Continental Gold ha firmado cuatro contratos de formalización con mineros de pequeña escala que estaban trabajando en su propiedad sin un título. Uno de estos mineros reportó un constante monitoreo de las condiciones mineras por parte de los empleados de Continental Gold y supervisión para impedir que los pequeños mineros fueran más allá de la profundidad permitida. Sin embargo, también afirmaron que empleados de la empresa de bajos rangos han recibido sobornos de mineros ilegales que operan dentro de las concesiones de la empresa para que les permitan continuar operando (entrevista con minero de pequeña escala de Buriticá). Un minero local entrevistado para este estudio reportó evidencia anecdótica de prácticas similares empleadas por el personal de seguridad de Mineros S.A. en El Bagre (entrevista con minero de pequeña escala de El Bagre). También se sospecha que en el 2012-2013, empleados de Continental Gold filtraron información a mineros ilegales sobre la existencia de depósitos de oro de oro a cambio de sobornos (El Tiempo, 2016a). Continental Gold se está sometiendo a una evaluación interna de riesgos y auditoría para prevenir este tipo de situaciones (entrevista con antiguo funcionario del gobierno y experto en seguridad, 2015).

Finalmente, las nuevas medidas implementadas por el gobierno han reducido el riesgo potencial de corrupción por parte de las autoridades civiles en el pago de impuestos y regalías. En Antioquia, los actores del sector minero aurífero tienen un historial de transportar oro producido en un municipio para ser vendido en otro. Por ejemplo, municipios con pocos títulos mineros como Maceo y Caucaasia reportaron altos niveles de producción (Giraldo y Muñoz, 2012, p.95). Aunque esto se puede deber en parte al hecho de que las compraventas y productores locales están ubicados en diferentes

municipios, se sospecha que los funcionarios locales han incentivado dichas transferencias para recibir mayores regalías (OCDE, 2016). Luego de la reforma al sistema de regalías en 2011 (ver informe general), las autoridades tienen menos incentivos para promover estas transferencias. No obstante, sólo recientemente los agentes de policía descubrieron inconsistencias en el reporte de pago de regalías de las comercializadoras internacionales de oro. A pesar de que la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia han aumentado de manera significativa la capacidad de realizar auditorías sobre las cuentas de las empresas y llevar a cabo visitas de campo (en particular en Antioquia), las autoridades sospechan que los funcionarios corruptos de la autoridad minera están confabulando con las comercializadoras internacionales para pasar por alto estos desfases (entrevista con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, 2016).

Lavado de dinero

Las autoridades están cada vez más atentas al uso potencial de compraventas y comercializadoras internacionales de oro en Antioquia como vehículo para lavar los ingresos provenientes del narcotráfico. Sin embargo, es difícil monitorear el sector de las compraventas locales de oro. De acuerdo con las estimaciones de una comercializadora internacional en Medellín, podría haber hasta 20.000 compraventas locales de oro operando en municipios mineros a lo largo del país. Las autoridades y los mineros locales han confirmado que los dueños de estas compraventas locales de oro tienen una cantidad significativa de capital y liquidez para soportar sus operaciones, lo cual levanta sospechas de que pueden estar siendo financiados directamente por grupos armados ilegales u organizaciones narcotraficantes. Desde los setenta, los carteles narcotraficantes han comprado oro para luego vendérselo a compraventas locales en municipios productores de oro y a comercializadoras internacionales/fundiciones en Medellín para así lavar sus ingresos ilegales (OCDE, 2016). Como se mencionó anteriormente, a finales de los noventa y comienzos de la década del 2000, los miembros de grupos paramilitares que operaban en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, como Bloque Mineros, invirtieron directamente en minas y compraventas locales. En cuanto a las guerrillas, una investigación reciente llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación reveló que entre el 2008 y el 2012 las FARC lavaban dinero de narcotráfico por medio de comercializadoras de oro nacionales ubicadas en Medellín. Presuntamente, estas comercializadoras compraban grandes cantidades de oro provenientes de comunidades indígenas en el departamento del Guanía, a lo largo de la frontera con Brasil y Venezuela (El Tiempo, 2016b). Para complicar aún más el asunto, las comercializadoras internacionales en Medellín suelen establecer compañías satélite que les sirven como proveedores a nivel municipal. Aunque ahora el RUCOM le exige a las compraventas locales presentar sus estados financieros y reportarlos a la DIAN, las autoridades han señalado la dificultad de supervisar de manera efectiva a estas compraventas locales (entrevista con agentes de la policía, 2015; entrevista con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, 2016).

Procesos de formalización y debida diligencia: iniciativas y perspectivas relevantes

Las autoridades sostienen que los pequeños mineros no autorizados son más vulnerables a la influencia de actores armados ilegales. Para hacer frente a esto, la Secretaría de Minas de Antioquia y el Ministerio de Minas han lanzado una serie de iniciativas en el departamento para legalizar y formalizar a pequeños mineros no autorizados que históricamente hayan operado en tierras donde los títulos mineros fueron concedidos a otras compañías. Desde el 2011, los esfuerzos por cumplir con lo acordado en el Convenio de Minamata han llevado al Ministerio de Minas a realizar una serie de actividades, incluyendo planes formales para eliminar de manera gradual el uso del mercurio por

parte de las plantas de beneficio y los mineros, para que así puedan aplicar eventualmente a una licencia ambiental.

En 2010, USAID lanzó su programa BIOREDD+ para apoyar a los mineros locales en los municipios de Tarazá, Cáceres, Segovia, Remedios y Buriticá en la legalización de sus minas y la formalización de sus prácticas. Luego de identificar más de 300 minas, 90 fueron seleccionadas para recibir capacitación y apoyo técnico, jurídico, ambiental y laboral. Aunque se espera que 43 de estas minas pasen a una etapa avanzada de formalización, antiguos asesores de BIOREDD+ reconocen que la mayoría de los pequeños mineros todavía están lejos de alcanzar los umbrales legales requeridos para solicitar un título minero (entrevista con experto en minería en Antioquia, 2015). El gobernador de Antioquia también invirtió más de USD \$5 millones de fondos públicos en el diseño e implementación de diversos programas de formalización.

Algunas empresas están trabajando junto con el Ministerio de Minas y Energía y la gobernación para legalizar y formalizar ciertas operaciones mineras, debido a que un gran número de pequeños mineros no autorizados operan dentro de las concesiones de grandes empresas mineras. Por ejemplo, en Zaragoza, Mineros S.A. le cedió 127 hectáreas de tierra a 35 mineros y sus familias, quienes crearon su propia compañía: Empresa de Mineros de Jobo Medio (Emijon).⁸ En Buriticá, Continental Gold originalmente firmó nueve subcontratos de formalización (que luego se redujeron a cuatro), una nueva figura establecida por el Ministerio de Minas, que le permitió a más de 500 mineros locales operar de manera legal en la región. Estos subcontratos de formalización fueron creados en el 2014 para asegurarle a los beneficiarios asistencia técnica. Tienen una validez de cuatro años y son firmados entre los mineros y la empresa, y supervisados por el gobierno. Finalmente, en Segovia, Gran Colombia Gold también comenzó a trabajar por la formalización. Cuando la empresa compro las minas de oro de Frontino, los antiguos empleados de la empresa habían establecido operaciones informales dentro de la concesión (ARM, 2016, pp. 50-51). Para hacer frente a este reto, Gran Colombia firmó contratos con 36 empresas mineras de pequeña escala que empleaban a más de 3.000 personas y comenzó a abastecerse de ellos (ibid).

Aunque estas iniciativas de formalización son necesarias y ya han comenzado a rendir frutos, no están libres de críticas y riesgos. Los mineros y especialistas entrevistados por los autores consideran que en algunas ocasiones estos contratos son sesgados e injustos. Otros, con puntos de vista más radicales, comparan a los contratos de operación con una nueva forma de esclavitud (entrevistas con mineros de pequeña escala de Segovia). Básicamente, estos mineros argumentan que: a) los contratos de operación entre los mineros locales y CGC son contratos de apenas un año, aunque prorrogables; b) el 100% de su producción de oro debe ser vendida a la empresa, y la pena por no cumplir es la terminación del contrato; c) toda su maquinaria debe ser cedida a la empresa al término del contrato, los mineros no reciben incentivos para invertir en nueva maquinaria; d) la ausencia de laboratorios independientes genera serias dudas acerca de la transparencia de las transacciones. En resumidas cuentas, aunque estos contratos de operación reducen el número de intermediarios a lo largo de la cadena de suministros, y por lo tanto mejoran la trazabilidad del oro, los mineros locales que han firmado contratos con Gran Colombia protestan que su actividad se ha vuelto económicamente insostenible.

De manera paralela, los mineros locales que se oponen a dichos contratos están siendo acusados de defender a las compraventas locales y plantas de beneficio que no están necesariamente preocupadas con medidas de debida diligencia, y por lo tanto contribuyen a la informalidad del sector minero aurífero. Por otra parte, Gran Colombia ha sido acusado de intentar forzar la clausura de algunas minas y eliminar a todos los intermediarios de la cadena de suministros local al presionar

(en ocasiones mediante la intimidación) a aquellos mineros que se rehúsan a firmar contratos de operación con ellos (entrevistas).⁹

En Antioquia, los mecanismos verificables y auditados de debida diligencia son poco frecuentes en las cadenas de suministro de las partes interesadas. Las grandes empresas mineras, incluyendo Anglo Gold Ashanti y Mineros S.A. se han adherido a las recomendaciones del Comité Minero Energético (una iniciativa de múltiples partes interesadas que promueve la implementación de los Principios Voluntarios) y del Pacto Mundial en materia de cómo realizar evaluaciones de riesgos relacionados con la seguridad y los derechos humanos. No obstante, la implementación de estas recomendaciones no está sujeta a auditorías por parte de terceros y es voluntaria. Las dos comercializadoras internacionales entrevistadas están implementando el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), un mecanismo de evaluación de riesgo contra el lavado de dinero y el terrorismo supervisado por la Superintendencia Financiera. Aunque este sistema le exige a las empresas analizar factores de riesgo a lo largo de su cadena de suministros y reportarlos a las autoridades financieras, los funcionarios reconocen que las empresas no realizan estas autoevaluaciones con el rigor necesario (entrevista con agente de la policía, 2015; entrevista con funcionario de la Fiscalía General de la Nación, 2016). Actualmente, C.I. Goldex está siendo procesado por lavado de dinero, y aunque implementó el SARLAFT en el 2012, no reportó la totalidad de sus transacciones potencialmente riesgosas.

Conclusión

El departamento de Antioquia no es solamente la principal región productora de oro de Colombia, sino una de las más desafiantes en cuanto a los riesgos del Anexo II. En la región operan todos los actores de la cadena de suministros de oro: mineros artesanales y de pequeña escala (la mayoría operando sin títulos), empresas mineras de mediana y gran escala (tanto aluviales como de veta, y nacionales como internacionales), compraventas locales de oro, refinadoras y comercializadoras internacionales de oro. No obstante, el riesgo de abastecerse de oro proveniente de Antioquia ha aumentado debido a la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que se lucran de las operaciones mineras, la generalización del lavado de dinero que involucra al comercio de oro y la corrupción que estas organizaciones generan.

De manera paralela, el departamento ha estado a la vanguardia de nuevas experiencias de formalización, legalización de pequeños mineros y está promoviendo la debida diligencia en el sector minero aurífero. A pesar de que hasta el momento los resultados han sido variados, el fortalecimiento y el fomento de este tipo de iniciativas es esencial a la hora de mejorar la información disponible para que las partes interesadas puedan implementar mejores procesos de debida diligencia en el futuro. Debido a la presión por parte de las autoridades por mejorar la trazabilidad de sus cadenas de suministro, las compañías mineras y comercializadoras internacionales de oro han manifestado su interés por implementar procesos de debida diligencia más seguros.

Es verdad que aún quedan muchos obstáculos y barreras. Con los futuros acuerdos de paz no desaparecerán los vínculos entre los grupos armados ilegales y el sector minero aurífero. Sin embargo, Antioquia servirá como prueba para mostrar que en Colombia se puede (o no) producir no sólo oro libre de conflicto, sino oro libre de criminalidad gracias a la cuidadosa supervisión de lo que sucederá en el departamento durante el periodo del postconflicto.

Bibliografía

- Alianza para la Minería Responsable (ARM) (2016), *La formalización de la pequeña minería en Colombia: experiencias desde el territorio*, Serie sobre la MAPE Responsable, Vol . 9.
- Cordy P. (2013), Presentation of the UNIDO Global Mercury Project in Colombia at the Second Global Forum on Artisanal and Small-Scale Gold Mining, Lima, 3 de septiembre 2013.
- Dirección para la acción integral contra minas antipersona – DAICMA (2016), Estadísticas de víctimas De minas antipersona, mayo, www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx (Fecha de consulta: 1 de junio 2016).
- Ejército de Colombia (2015), “Compañía 'Héroes de Tarazá' del ELN en Antioquia, pierden importante integrante,” 4 de mayo, Compañía 'Héroes de Tarazá' del ELN en Antioquia, pierden importante integrante (Fecha de consulta: 30 de abril 2016).
- El Colombiano (2015), “Amenazas de Urabeños dejan sin empleo a 1.600 mineros en Segovia”, 6 de octubre.
- El Colombiano (2010), “El dorado de las bandas criminales”, 2 de octubre.
- El Tiempo (2016a), “Los audios que enredan al ‘vicepresidente’ de los Úsuga”, 9 de abril.
- El Tiempo (2016b), “El rastro de la plata de las Farc en los negocios del 'zar del oro'”, 27 de octubre 2016.
- Entrevista con mineros de pequeña escala de Segovia, Entrevistados por: Frédéric Massé y Juan Munévar (2 de diciembre 2015).
- Entrevista con antiguo funcionario de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, Entrevistado por Juan Munévar y Frédéric Massé (3 de diciembre 2015).
- Entrevista con minero de pequeña escala de Andes, Entrevistado por: Frédéric Massé y Juan Munévar (2 de diciembre 2015).
- Entrevista con asesores de RSC para empresas mineras en Antioquia, Entrevistados por: Frédéric Massé y Juan Munévar (4 de diciembre 2015).
- Entrevista con ejecutivo de comercializadora internacional de oro, Entrevistado por: Frédéric Massé y Juan Munévar (4 de diciembre 2015).
- Entrevista con director de asociación de comercializadoras internacionales de oro, Entrevistado por: Frédéric Massé y Juan Munévar (5 de diciembre 2015).
- Entrevista con mineros de pequeña escala de Buriticá, Entrevistados por: Frédéric Massé y Juan Munévar (1 de diciembre 2015).
- Entrevista con funcionario de la Defensoría del Pueblo en Antioquia, Entrevistado por: Juan Munévar y Frédéric Massé (6 de diciembre 2015).
- Entrevista con reportero local, Entrevistado por: Juan Munévar y Frédéric Massé (6 de diciembre 2015).

Entrevista con agente de policía local, Entrevistado por: Juan Munévar (17 de octubre 2015).

Entrevista con funcionario de ONG por los derechos de los niños, Entrevistado por: Juan Munévar (12 de abril 2016).

Entrevista con minero de pequeña escala de El Bagre, Entrevistado por: Juan Munévar y Frédéric Massé (3 de diciembre 2015).

Entrevista con experto en minería en Antioquia, Entrevistado por: Juan Munévar y Frédéric Massé (1 de diciembre 2015).

Entrevista con funcionario de la Asociación Colombiana de Minería, Entrevistado por: Juan Munévar (20 de mayo 2016).

Entrevista con funcionario de empresa minera de gran escala en Antioquia, Entrevistado por: Frédéric Massé (3 de diciembre 2015).

Entrevista con agentes de la policía, Entrevistados por: Juan Munévar y Frédéric Massé (4 de diciembre 2015).

Entrevista con antiguo funcionario del gobierno y experto en seguridad, Entrevistado por: Juan Munévar (22 de julio 2015).

Entrevista con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Entrevistados por: Juan Munévar (7 de marzo 2016).

Entrevista con funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Entrevistados por: Juan Munévar (12 de julio 2015).

Fiscalía General de la Nación (2015), “262 muertos y mutilados llevaron a la cárcel a explosivista de las Farc”, 27 de mayo, www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/262-muertos-y-mutilados-llevaron-a-la-carcel-a-explosivista-de-las-farc/ (Fecha de consulta: 30 de abril 2016).

Fiscalía General de la Nación (2016), “Orden de captura contra secretariado de las FARC por reclutamiento de menores en Antioquia”, 13 de junio, www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/orden-de-captura-contra-secretariado-de-las-farc-por-reclutamiento-de-menores-en-antioquia/ (Fecha de consulta: 13 de junio 2016).

Fiscalía General de la Nación (2016), “Condenado guerrillero de las FARC por atentado terrorista en Briceño (Antioquia)”, 4 de marzo, www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenado-guerrillero-de-las-farc-por-atentado-terrorista-en-briceno-antioquia (Fecha de consulta: 30 de abril 2016).

Fiscalía General de la Nación (2015), “Asegurado coronel del Ejército por 16 homicidios”, 11 de diciembre, www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/asegurado-coronel-del-ejercito-por-16-homicidios/ (Fecha de consulta: 30 de abril 2016).

Ministerio de Trabajo (2013), “Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas,” <http://apps.mintrabajo.gov.co/siriti/display.aspx> (Fecha de consulta: 30 de abril 2016).

Ministerio del Medio Ambiente (2012), “Sinopsis nacional de la minería aurífera artesanal y de pequeña escala”, www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/mercuro/Sinopsis_Nacional_de_la_ASGM.pdf

OCDE (2016), *Due diligence in Colombia's gold supply chain*, www.oecd.org/investment/investment-policy/Colombia-gold-supply-chain-overview.pdf

Organización Internacional del Trabajo – OIT (2001), “El trabajo infantil en la minería artesanal de oro,” <http://oitcolombia.org/Descargas/Peores-Formas/lboro.pdf> (Fecha de consulta: 12 de febrero 2016).

Rama Judicial, Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, Sentencia contra Rodrigo Perez Alzate, N. 110016000253200680012, 30 de agosto 2013,

VerdadAbierta.com (2015), “Legalizar la minería en el Bajo Cauca: ¿experimento fallido?”, 6 de mayo, www.verdadabierta.com/otros-negocios-criminales/5748-legalizacion-de-la-mineria-en-bajo-cauca (Fecha de consulta: 30 de abril 2016).

VerdadAbierta.com (2013), “Segovia y Remedios, siguen en medio de la guerra,” 2 de mayo, www.verdadabierta.com/rearme/4569-segovia-y-remedios-escenario-de-guerra (Fecha de consulta: 30 de abril 2016).

Referencias

¹ A pesar de haber delegado decisiones de contratación y minería al Departamento de Antioquia, la Agencia Nacional de Minería continúa siendo la única institución que puede tomar decisiones sobre concesiones y solicitudes de formalización y legalización.

² El Ministerio de Minas ha empleado el termino "regulación" para referirse a la legalización y formalización de mineros sin títulos.

³ Los mineros locales entrevistados estimaron que los pequeños mineros pueden estar produciendo más de USD \$2 millones en oro semanalmente. Los yacimientos auríferos del municipio son muy codiciados debido a sus altos niveles de adecuación. Entrevistas con expertos locales.

⁴ La legislación colombiana no clasifica a los mineros según sus medios de producción, sino por su tamaño. La categoría de minería artesanal no está contemplada en la legislación colombiana. Para una descripción más detallada de programas de formalización y legalización vea OCDE (2016), Debida Diligencia en la Cadena de Suministros de Oro Colombiana

⁵ Para finales del 2015 Colombia había registrado 27.238 barequeros. Sin embargo, algunos analistas creen que esta cifra puede estar inflada debido a la implementación del RUCOM, el cual le impuso restricciones a los pequeños mineros. Los barequeros pueden operar libremente una vez se hayan registrado en su municipio. Como resultado, se puede estar explotando oro de manera ilegal y vendiéndose por medio de estos actores para ocultar el verdadero origen del oro.

⁶ Según la Convención de Ginebra y el Artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la apropiación ilegal de títulos de propiedad es considerado un crimen de guerra

⁷ Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos fueron creados en el 2000 y es una iniciativa de múltiples partes interesadas que busca que las empresas del sector extractivo mantengan la seguridad de sus operaciones y de manera paralela se adhieran a los más altos estándares de respeto por los derechos humanos. La iniciativa está conformada por empresas, gobiernos, ONGs y organizaciones internacionales.

⁸ Durante años, Mineros S.A. se había hecho el de la vista gorda frente a las actividades de minería ilegal dentro de sus concesiones. Sin embargo, entre encontrar la solución y la cesión de áreas hubo dos años de difíciles negociaciones. Todavía los resultados no son completamente seguros. La fórmula tiene problemas administrativos, técnicos y legales a pesar de la creación en el 2012 de un Laboratorio de Legalización y Formalización en la subregión del Bajo Cauca financiado por el gobierno, la Gobernación de Antioquia y cooperación internacional. La fórmula no ha sido replicada debido a las dificultades.

⁹ De acuerdo con fuentes locales, recientemente habría sido propuesto un proyecto de ley que obligaba a los chatarreros a vender la totalidad de su producción a Gran Colombia Gold. Según la misma fuente, mientras que el alcalde local se oponía al cierre de las minas, Gran Colombia Gold intentaba convencer a la empresa de energía local de cortar la energía a esas minas. Cuando la empresa de energía se negó a hacerlo, Gran Colombia Gold recurrió a la Procuraduría para así forzar al alcalde local a cerrar las minas y la Agencia Nacional de Minería envió a algunos de sus empleados para confirmar la clausura. Según las mismas fuentes, el pueblo de Segovia se opuso a la medida.

DEBIDA DILIGENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTROS DE ORO COLOMBIANA MINERÍA AURÍFERA EN ANTIOQUIA

Este informe es el segundo en una serie de evaluaciones de las cadenas de suministro de oro en Colombia y de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo en el contexto colombiano. Analiza las condiciones de la industria extractiva y los riesgos relacionados para la región colombiana de Antioquia.

mneguidelines.oecd.org/mining.htm

